

# EL OBSERVADOR.

## Noticias extranjeras.

### FRANCIA.

Paris, 13 de noviembre.

Segun se dice, las dos únicas cuestiones políticas que hoy se han tratado en el gabinete, son la amnistia y el sistema que ha de seguirse en adelante. En cuanto a la primera, los ministros sin exceptuar a Mr. Persil han convenido en la necesidad de esta medida, y aun se añade que el mismo es el que se ha encargado de presentar el proyecto a la próxima apertura de la sesion. Esta contradiccion manifiesta con sus antecedentes, y con la violenta opinion que emitió cuando el mariscal Gerard estaba todavia en el consejo, llegará a ser un incidente curioso al abrirse la cámara.

La segunda cuestion halló menos unanimidad. Mr. Persil cediendo esta vez a su natural carácter, sostuvo que era preciso limitarse a la continuacion del sistema del 11 de octubre: es decir, a no abandonar las prisiones, ventas domiciliarias, arrestos preventivos, y en una palabra, al uso brutal de la fuerza.

Mayor moderacion mostró el señor duque de Bassano, pues propuso que el 13 de marzo se considerase como punto desde donde debia partirse, y que imitando a Casimiro Perrier se propusiese al gobierno como regla de su conducta no salir jamás del círculo de la legalidad. Quiere el señor duque que el ministerio tenga firmeza, pero que no sea violento; que se concilie el respeto, pero que no se grangee el odio.

Este diverso modo de ver la marcha que ha de imprimirse a la administracion ha retardado, mas que la vacante provisional de dos de los ministros, la publicacion del programa en el Monitor. Hoy mismo se ha discutido nuevamente este punto en el consejo, y hay motivo de creer que nada se ha decidido: ó por lo menos se asegura que el periódico oficial no debe hablar mañana de semejante negocio. (Correo frances.)

## Parte oficial.

MADRID 24 DE NOVIEMBRE.

### Reales decretos.

Convencido mi Real ánimo de que las reformas que estoy planteando en el orden judicial serian incompletas si no se estableciese un sistema ordenado y general, que fijase el número, clases, atribuciones y cualidades que deben tener los escribanos de todo el reino, he venido en mandar que una comision, compuesta de don José María Calatrava, ministro del supremo tribunal de España e Indias; don Joaquín de la Escalera, ministro de la Real audiencia de Madrid; don Pedro Jiménez Navarro, fiscal del mismo tribunal; don Felipe Lopez Valdemoro, abogado del colegio de Madrid, y don Manuel de Carranza, como secretario, examinando los trabajos hechos sobre tan importante materia, y teniendo en consideracion los derechos de propiedad particular que afecta a una gran parte de estos oficios públicos enagenados de la corona, forme un proyecto de ley sobre el arreglo de escribanos y notarios de reinos, proponiendo al mismo tiempo las indemnizaciones que hubieren de recibir los dueños de las escribanias enagenadas, que no deben continuar como de dominio privado por mas tiempo que el necesario para hacer efectivas las indemnizaciones, atendida la naturaleza e importancia de estos oficios. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Para uniformar todas las audiencias del reino al tenor de lo dispuesto para la de Madrid, he venido en mandar, que desde el año próximo de 1835 los ministros de aquellas entiendan indistintamente en negocios civiles y criminales, formándose sobre esta base el arreglo de salas. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Cometido a los alcaldes mayores y corregidores letrados el conocimiento en primera instancia de todos los asuntos contenciosos, y a las Reales audiencias en apelacion y súplica los de todo el territorio que les está demarcado; y teniendo en consideracion lo dispuesto en mi Real decreto de 9 de febrero último con respecto a la Real audiencia y juzgados inferiores de Madrid, he venido en decretar, que desde principio del año próximo de 1835 queden suprimidos los juzgados llamados de provincia, que están a cargo de los alcaldes del crimen; mandando que los negocios pendientes en ellos se continúen y fallen, desde dicha época, por los alcaldes mayores ó corregidores letrados del partido, por ante los escribanos en cuyos oficios radican; los cuales desde la supresion de dichos juzgados, podrán actuar como los numerarios de los colegios. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda para su cumplimiento. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Deseando que no sufra retraso la administracion de Justicia en primera instancia por la supresion de los juzgados de provincia a cargo de los alcaldes del crimen de las audiencias, he venido en mandar, que en las capitales de provincia se establezca el competente número de jueces inferiores. Y señalo para la ciudad de Barcelona cuatro; para la de Granada tres; para la de Sevilla cuatro; para la de Zaragoza dos, y para la de Valencia cuatro. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Deseando que la justicia se administre en primera instancia por los jueces letrados de partido, conforme con lo dispuesto en mi Real decreto de 21 de abril último, he venido en mandar, que los corregidores políticos y los gobernadores militares que reúnen la calidad de políticos, cesen en el conocimiento de negocios contenciosos, así criminales como civiles, quedando desde luego su sustanciacion y fallo a cargo de los alcaldes mayores y corregidores letrados. = Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Vengo en suprimir la secretaria de la presidencia del estinguido consejo de Castilla, cuyos papeles se pasarán al archivo general del consejo Real de España e Indias, quedando cesantes todos los empleados en ella, con el sueldo que les corresponda por clasificacion, hasta que sean emplazados en destinos correspondientes a su clase. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Concedo los honores del supremo tribunal de España e Indias a don Francisco Verea y Cornejo, regente de la Real audiencia de Madrid; a don Antonio Ubac, de la de Galicia; a don Miguel Antonio Zumalacarrégui, de la de Burgos, y a don José Alonso, ministro de la de Madrid y comisario regio de Vizcaya. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Para la plaza de la Real audiencia de Madrid, vacante por fallecimiento de don Gerónimo Manuel Caballero, nombro a don José Cecilio de la Rosa, oidor de la de Sevilla; para esta plaza a don Felipe Urbina y Daoiz, alcalde del crimen de la de Valencia; y para esta resulta a don Pedro Antonio Moraleja, teniente de asistente de Sevilla. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Vengo en conceder los honores de la audiencia de Madrid a don Miguel Garcia Cornejo, teniente de corregidor electo de la misma villa. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 22 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Para la dignidad de maestraescuela de la santa metropolitana iglesia de Granada, vacante por fallecimiento de don Juan Garcia Figueroa, nombro a don Bartolomé Venegas y Cabrera, canónigo electo de la santa iglesia colegial del Sacromonte de Granada. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

Atendiendo a los méritos y servicios prestados en favor de la iglesia y del estado por el presbitero don Manuel Lopez Cepero, y usando de la reserva contenida en mi Real decreto de 9 de marzo último, vengo en nombrarle para la canonjia de la santa metropolitana iglesia de Sevilla, vacante por muerte de don Juan Antonio de Urizar e Ibarrola. Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 16 de noviembre de 1834. = A don Nicolas Maria Garely.

He aquí las noticias de Inglaterra mas recientes recibidas de Paris con fecha del 17 de noviembre por la tarde. Extracto de los papeles ingleses.

Aunque no tenemos un documento oficial para salir garantias de la siguiente noticia, nos fundamos en razones de mucha probabilidad y la estampamos enteramente persuadidos de su certeza. Por lo mismo nos abstengamos de hacer comentarios sobre ella y la trasladamos en los mismos términos que nos ha sido comunicada esta mañana a primera hora.

«El rey se ha aprovechado de la oportunidad que le ha ofrecido la muerte del lord Spencer para deshacer el actual ministerio, y hay poderosísimas razones para creer que se ha llamado al duque de Wellington. «La reina es quien lo ha hecho todo.» (The times.)

—The courier se explica en estos términos: El ministerio del lord Melbourne ha caído! S. M. al recibir la noticia de la muerte del lord Spencer parece ha enviado a llamar al duque de Wellington, con la intencion segun se dice, de confiar a S. E. el importante encargo de formar un nuevo gobierno. Estas noticias no podrán menos de excitar el mayor asombro en todo el pais; y si no nos equivocamos, serán lamentadas por todas las personas de consideracion, sea cual fuere su creencia política. El mayor defecto del último gobierno consistió en su excesiva condescendencia en contemporizar con los abusos admitidos; esto es lo que principalmente le hizo perder gran parte de

la popularidad que gozaba. Respetaba demasiado a la iglesia y a los laicos; y por esto dejó de obrar con respecto a la Irlanda con toda la energia y decision que debiera. Sin embargo, habia razones para creer que en adelante hubiera adoptado un rumbo mas imponente. El Lord Melbourne es incapaz de obrar inflexiblemente en ningun negocio; pero tampoco es de aquella clase de hombres que sostienen lo que es evidentemente nocivo, ni mucho menos espondria la seguridad de la monarquia para grangearse los aplausos del partido orangista y de la iglesia de Irlanda. El hubiera hecho reformas efectivas, aunque obrando siempre con cautela, mirando con igual indiferencia los aplausos del populacho, y los reformistas exaltados, y las befas de sus contrarios en la cámara de los Lores. Quizá no sea imposible que el duque de Wellington adopte una conducta semejante; mas todas las probabilidades están por la parte contraria, y aun arasco seria absurdo suponer que el lord Melbourne hubiera sido echado del ministerio para ceder el puesto al señor duque, sin que de antemano se hubiese determinado un cambio de politica. Si tal es el caso, los resultados no pueden dejar de ser perniciosos; porque es imposible que ningún gobierno que no sea enteramente liberal pueda subsistir en nuestro pais por mucho tiempo, y es indudable que todas las clases de reformistas dejarían a un lado sus diferencias, y se unirían para derrocar al enemigo comun. Nosotros no podemos retrogradar ni resistir a las reformas y cambios que requieren a la vez el espíritu del siglo y nuestra situacion temporal. Sabemos que el duque de Wellington, apesar de haber sido llamado no se ha presentado aun a S. M., y confiamos en que S. E. se mirará mucho antes de comprometerse a entrar con el rey en un compromiso de medidas hostiles contra las miras de la gran masa del pueblo inteligente. Pero supongamos que S. E. se ponga a la cabeza de un ministerio anti-reformista, ¿se uniría sir Robert-Peel en esta aventura desesperada? Se asegura que el lord Spencer se ha negado a admitir en la actualidad ningun cargo político.

La Inglaterra va a verse ahora en una crisis espantosa. La realizacion de las medidas esperadas de una administracion liberal y amante de reformas saludables, va a quedar a merced del partido que con mayor ahinco se ha opuesto a ellas. El acta de la emancipacion de los negros ha de ser obra de los campeones de su esclavitud. La franquicia del comercio de la India ha de esperarse de los enemigos de la libertad mercantil. La mitigacion de las leyes criminales, de los partidarios de la crueldad en los castigos. Las medidas económicas, de los abogados de la locura y todas las mejoras, en una palabra, de los enemigos de la correccion y las reformas. (The globe.)

—Hoy ha corrido la siguiente lista de las personas que han de componer el nuevo ministerio. El duque de Wellington, el duque de Richmond, lord Ellenborough, lord Brougham, lord Stanley, sir James Graham, sir G. Murray, sir Robert Peel, el conde de Aberdeen, lord Rosslyn, Mr. Gopldburn, y Mr. Herries. Sin embargo, no se le ha dado entero credito.

Ha caido el nuevo ministerio francés segun nos dice el messenger. Si esta noticia se hubiera recibido ayer pudiera haber hecho gran sensacion, pero hoy! nos limitaremos a decir.

Pauvres petits infortunés!

Vous etes morts, avant que d'etre nés!

¿No podrá ocurrir que suceda lo mismo con otro gabinete que está aun en embrión? (Globe.)

Bolsa de Paris del 17 de Noviembre a las cuatro de la tarde.

5 por o/o frances.	105 60
3 por o/o id.	77 60
Renta Perpétua.	43 1/2
Guebhard.	43 1/2
Córtes.	39
Cupones.	25 1/2
Diferida.	14 3/4
3 por o/o.	27 3/8

## CORTES GENERALES.

ESTAMENTO DE ILUSTRES PROCERES DEL REINO.

SESION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE.

Presidencia del señor duque de Gor.

Se abrió a las doce menos cuarto. El Sr. secretario duque de Rivas leyó el acta de la sesion anterior que fue aprobada sin discusion.

Se hallaban en el banco ministerial los señores secretarios del Despacho de Estado y de Gracia y Justicia.

El Sr. secretario marques de Guadalcazar dió cuenta de varios oficios que el señor presidente del consejo de ministros remitia al Estamento. Por el 1.º participaba que S. M. la Reina Gobernadora habia tenido a bien elevar a la dignidad de Prócer del Reino al señor don Miguel de la Torre, capitán general de la isla de Puerto-Rico. Al segundo acompañaba otro del señor don Miguel Tacon, capitán general de la isla de Cuba, por el cual daba las gracias por haber sido elevado a la misma dignidad. Otro en que manifestaba la imposibilidad en que se hallaba el señor conde de Fernandina de asistir al Estamento. Otro por el cual decia haber prestado juramento en calidad de Prócer el



señor don Evaristo Perez de Castro, enviado de S. M. en Lisboa: otro de haber hecho lo mismo por igual razon el señor don Cayetano Valdés.

Igualmente se dió cuenta de otro oficio del señor ministro de Gracia y Justicia al que acompañaba 200 ejemplares del decreto de espulsion del infante don Carlos. Otro del señor presidente del consejo de ministros por el que participaba habers puesto en camino para esta corte el Excmo. Sr. Leon y Pizarro Prácer del reino.

Asimismo se dió cuenta al Estamento del fallecimiento del señor don Tomas Gonzalez Carvajal y del señor conde Armildez de Toledo.

El mismo señor secretario marqués de Guadalcazar, como relator de la comision de examen de documentos manifestaba haber completado la prueba de los suyos el señor marqués de San Martin de Hombreiros, y que la comision hallandola arreglada, era de dictamen debía ser admitida definitivamente.

Orden del dia. Proyecto de ley sobre reintegro de los compradores de bienes vinculados que se enagenaron á virtud del decreto de las Cortes de 1820.

Se leyeron el proyecto de ley y el dictamen de la comision.

El señor secretario del despacho de Gracia y Justicia tomó la palabra y dijo: ilustres Próceres, presento en este lugar de orden de S. M. con el fin de sostenerlo el proyecto de ley que va á ocupar al Estamento. Por un decreto de las Cortes dado en 27 de setiembre de 1820, se autorizó á los dueños de mayorazgos para que pudiesen vender libremente parte de sus bienes, á consecuencia del cual hubo muchos capitalistas que con la mejor buena fé invirtieron sus capitales en la compra de estos bienes. De resultados de los dolorosos sucesos ocurridos tres años despues, se dió el decreto de 1.º de octubre de 1823 de triste memoria, por el cual se anulaban todos los actos ocurridos en los tres años anteriores. No me detendré en pintar el cuadro desgraciado que produjo tal decreto; me limitaré solo á referir los hechos que se siguieron á él. El gobierno de aquella época, queriendo remediar en parte los males originados á los compradores de bienes vinculados, hizo que en el año de 24 se ocupase el consejo de Castilla del medio que podría adoptarse para resarcir en parte los daños espresados; el consejo dió un informe arreglado á las circunstancias de que se hallaba rodeado. De aquí es facil presumir que el medio que se propuso no era el que se necesitaba. S. M. la Reina Gobernadora, queriendo remediar tantos males dió un decreto en el mes de octubre de 1833, por el cual encargaba al mismo consejo de Castilla, examinase lo obrado hasta entonces en la materia, y propusiese el medio de conciliar los intereses de vendedores y compradores; el espresado consejo se estaba ocupando de este negocio, cuando fue disuelto y creado en su lugar el tribunal supremo de Gracia y Justicia, y una seccion de España é Indias que heredase las facultades de aquel: de aquí resultó pasar este espedito á dicha seccion que se ocupó con el celo que le es propio, de este asunto y tardó bien poco el dar su dictamen, á resultados del cual se extendió y presentó el referido proyecto de ley á este ilustre Estamento, quien mandó pasase á las comisiones reunidas de Estado y de Gracia y Justicia, para que lo examinasen y diesen su dictamen. Estas lo han hecho con la prudencia y tino propias de los individuos que las componen, así que el gobierno ha visto con satisfaccion que la esencia se conforma con el espresado proyecto, haciendo algunas pequeñas variaciones que han creído necesarias y que el gobierno no se opondrá á su admision en la parte que las crea justas y arregladas. S. M. la Reina Gobernadora, no ansiando mas que la felicidad de todos los españoles, desea ver prontamente arreglado este negocio. El gobierno cree debe darse principio á esta discusion por el referido proyecto, sin embargo, detener presentes las adiciones que las comisiones han hecho á algunos de sus artículos para cuyo tiempo me reservo hacer las observaciones oportunas, debiendo manifestar al mismo tiempo que el gobierno no tiene empeño en sostener su proyecto, tal como lo ha presentado, pues como he dicho antes, no se opondrá á las adiciones hechas que le parezcan justas. He dicho.

El señor conde de Ofalia, como individuo de la comision tomó la palabra y en un extenso discurso, que apenas pudo ser oido, alegó las razones en que la comision se habia fundado, para variar parte de algunos artículos que dijo, sostenia cuando se entrase en la discusion de ellos; y concluyó elogiando los maternales deseos de S. M. que no aspira mas que á la ventura y felicidad de sus pueblos.

El señor marqués de S. Felices: despues de haberse hecho cargo de la desventajosa posición en que se hallaba al combatir un proyecto tal, como el presentado por el gobierno, y apoyado en las bases principales por las dos comisiones unidas del Estamento, y protestando poder entrar con desembarazo en el lleno de la cuestion, sin que le llevase ningun espíritu de partido, ni interes personal, pues ni era comprador, ni vendedor, ni poseedor de los bienes de que se trata: empezó su discurso del modo siguiente. Cuando las naciones despues de mil revueltas llegan por fin á tener un gobierno reparador, no puede este seguir la senda estricta de la justicia, sin que necesite atemperar sus principios á las circunstancias, tomando medidas de conciliacion para reparar las injusticias hechas sin herir á los demas; así, pues, me parece á mi que en las medidas que se intentan tomar ahora respecto de la validacion de las ventas de bienes vinculados, debieran tenerse presentes las consecuencias que de llevar á cabo las medidas propuestas podrán resultar, siendo enteramente favorables á los compradores, y perjudiciales á los vendedores; yo quisiera, pues, que se tratase con la igualdad posible á unos y á otros, y sobre todo, quisiera que no se castigase tan severamente á los herederos de los vendedores que por el decreto de 1824, han entrado en posesion de los bienes que vendieron los anteriores poseedores; pues es muy posible que en el término de los diez años transcurridos

hayan pasado por muchas manos, que nada tuvieron que ver con los que los vendieron, y á quienes sin embargo se condenan, como se pudieran condenar á los mismos vendedores; esto es, á que paguen el capital con mas un tres por ciento en un solo año.

Sabido es, que el poseedor de buena fé hace suyos los frutos por todo el tiempo que posee la finca con esta calidad, y que si sale otro que tiene mejor derecho á ella, no puede obligarse á mas que á entregar la finca al verdadero dueño, y habiendo muchos poseedores de esta especie entre los de bienes vendidos por el decreto de 1820, y vueltos á la vinculacion por el derogatorio de 1824, no halló razon ninguna para que á estos poseedores quiera hacerse de una condicion mucho peor, obligándoles ademas de volver la finca al pago de un rédito de 3 por 100 anual del capital por el que se vendió ésta, dándoles el solo término de un año; cuando es bien notorio que en esta última época la mayor parte no han producido el 3 por 100 que quiere exigirseles, y yo suplicaria al gobierno y á las comisiones tuviesen á bien de rebajar un 3 por 100 al uno y medio, y esto seria un medio de conciliacion que no hiriese tanto á los actuales poseedores, y resarciese en algun modo á los compradores, pues de otro modo yo no podré aprobar, ni el proyecto del gobierno, ni el dictamen de la comision.

El señor ministro de Gracia y Justicia: El gobierno habia previsto ya esta especie de reconvenccion que pudiera hacerse; pero conoció tambien la obligacion que habia de reembolsar el dinero que habian pagado los que con la autorizacion de una ley compraron los bienes vinculados. Conoció asimismo que el que entró á poseer estos bienes, devueltos ya á la vinculacion, y pasados á otras manos de las que los enagenaron, debió sentir alguna especie de remordimiento por la suerte que cupo á los que los compraron, y conocer tambien que llegaria un dia en que fuesen reconocidas como legítimas y legales aquellas ventas, y que se le obligaria á la devolucion de las fincas ó del capital y sus réditos. El señor preopinante ha dicho que es un término demasiado corto el que la ley concede á los poseedores para hacer la devolucion, pero el gobierno ha creído ser suficiente y deber guardar en algún modo la analogia que tiene este caso con los retractos. El preopinante ha reconocido el principio de la devolucion del capital, y asimismo del pago de los réditos devengados en todo este tiempo, diferenciando solo en el precio que debiera señalarse; pero de este principio eterno se deduce que cuando se presenta un señor á reclamar una cosa con mejor derecho que el que la posee, debe este cedérsela, y que cuando uno ha hecho desembolsos para obtener una cosa, si la perdiere sin culpa suya y sin derecho, debe compensarse el capital y los perjuicios sufridos.

El señor marqués de san Felices dijo que el no reconocia como principio, debieran pagarse los réditos á los compradores, sino que habia propuesto el medio del uno y medio por 100, como un término de conciliacion.

El Sr. marqués de Espeja pidió que solo devolviese el capital el actual poseedor ó la finca, ó cuando mas se le añadiese el uno y medio por ciento de réditos, como lo habia propuesto el señor marqués de S. Felices, pues de otro modo resultaria que multiplicando por los 10 años que habian transcurrido desde el 24 por los 3 de rédito que queria exigirse la cantidad á que ascendiera, seria la enorme del 30.

Habiéndose declarado cerrada la discusion general, y preguntado el Estamento si habia lugar á pasar á la discusion de las disposiciones particulares del proyecto decidiese por la afirmativa de 61 Próceres que se hallaban presentes los 60, oponiéndose solo el señor marqués de S. Felices.

En seguida se leyó el artículo 1.º del proyecto de ley que dice así: «Los compradores de bienes vinculados que se enagenaron á virtud del decreto de las Cortes de 27 de setiembre de 1820, si no hubiesen sido ya reintegrados, lo serán en el modo que espresan los siguientes artículos.» Este fue aprobado sin discusion, y leído el 2.º que dice así: «Los compradores de dichos bienes que los hubiesen devuelto á virtud de la Real cédula de 11 de marzo de 1824, deben percibir íntegro el valor por el que los habian adquirido, y el rédito de un 3 por 100, á contar del dia de la devolucion.» Dijo el señor duque de Rivas que habiendo demostrado en su primer discurso el señor ministro de Gracia y Justicia que se adoptase en el segundo lugar el artículo del dictamen de la comision en lugar del presentado por el gobierno, que le parecia deberse votar el de la comision.

El Sr. ministro de Gracia y Justicia mostró estar conforme, y puesto á votacion el dicho artículo de la comision, fue aprobado, y es como sigue: «Los compradores de bienes vinculados que no han llegado á desprenderse de ellos, quedan asegurados en su pleno dominio.»

Volvióse á leer el segundo del proyecto de ley que quedaba ahora como tercero, y el señor duque de Rivas despues de protestar que no pertenecia ni á compradores ni vendedores, ni poseedores de bienes vinculados, dijo que si se tratase de castigar á los vendedores, no se contentaria con un tres por ciento, sino que exigiria que fuese un cincuenta; pero que tratando solamente de los poseedores, y poseedores que tal vez ningun fruto hayan percibido de la venta, no le parecia justo se les exigiese lo que acaso ellos no habian disfrutado, sino por muy poco tiempo, y apoyando la propuesta que antes habia hecho el señor marqués de S. Felices, de que solo se les exigiese el uno y medio en lugar del tres por ciento, dijo creia ver en los semblantes de los ilustres Próceres que le oian, una señal cierta de aprobacion.

El Sr. García Herreros se levantó, y dijo: que no veia el

una señal tan cierta de aprobacion en los semblantes, cuando se trataba de una cosa tan justa, y mucho menos de la devolucion del capital desembolsado por los compradores y de los réditos que pudiera haberles producido, si hubiera estado en su poder, dedicándolo á otras especulaciones. Hizo ver que no se trataba sino de los réditos del capital, y de ningun modo de los productos que pudiera haber dado la finca.

Moviése acerca de esto alguna discusion en la que tomaron parte los señores duque de Rivas, marqués de Espeja, obispo Vallejo, marqués de S. Felices y Pezuela: cortándola el señor ministro de Gracia y Justicia, diciendo lo mismo que el Sr. García Herreros, que no se trataba de los productos de la finca, sino de los réditos del capital, habiendo señalado un precio ínfimo como es el de un tres por ciento, concediendo la ley mayores en algun caso; pero el gobierno no habia querido adoptarlos, poniéndose en un término que á él le parecia medio; que en cuanto á lo que algunos señores preopinantes querian que el pago pudiera hacerse en papel, debía distinguirse el valor del papel, si habia de ser la cantidad que señalaba, ó el precio que tenia en la bolsa que en el primer caso era muy injusto, pues se defraudaba al comprador que habia entregado una cantidad efectiva, y se le devolvía ahora otra mucho menor; pero que si era en el segundo caso, es decir, que el papel solo tuviera el valor que en la bolsa, no hallaba inconveniente alguno en que pudiera efectuarse con el el pago.

El Sr. marqués de Guadalcazar dijo, abundaba en los mismos principios manifestados por los señores preopinantes, y que se aprobaba el artículo, se proponia hacer una adición con el objeto de que los poseedores actuales pudiesen reintegrar ó hacer pago de los intereses con papel de la renta consolidada por su valor nominal.

Se leyó otra vez el artículo 3.º y se propuso que se dividiese por partes, á lo que no accediendo el Estamento se pasó á su aprobacion verificándose esta por 38 votos contra 23.

Se dió conocimiento al Estamento de la adición del señor marqués de Guadalcazar que fue del modo siguiente «podrán los vendedores de fincas reintegrar á los compradores los intereses vencidos con papel de la deuda consolidada, al precio que se haya señalado en la bolsa, el dia que se verifique el pago.»

El Sr. marqués de Puñonrostro apoyó la adición referida pidiendo que el proyecto pasase nuevamente á la comision con el objeto de que examinase este punto, para tomar una medida que no redundase en perjuicio de los herederos de aquellos que vendieron las fincas que no percibieron el capital, y que iban á pagar una cosa en lo que no habian intervenido, y que no habia resultado en su provecho.

El Sr. obispo Vallejo dijo que esta idea estaba espresada en los artículos 4 y 5, por lo que, creia que no convenia hacerla en este lugar.

Se preguntó al Estamento si tomaba en consideracion la adición y este resolvió negativamente.

Se leyó otra adición hecha por el señor marqués de S. Felices, concebida en estos términos: «Entendiéndose libres de la devolucion aquellos á quienes vendieron los bienes sus tutores y curadores.»

El Sr. obispo Vallejo se opuso á que se tomase en consideracion, porque el caso que se citaba estaba previsto en nuestras leyes, y para ser válido el contrato era necesaria la anuencia de las partes, pues aquellos que hubiesen comprado sin estos requisitos habrian perdido enteramente el derecho.

No tomó el Estamento en consideracion la adición del señor marqués de San Felices.

Se leyó el artículo 4.º del proyecto del gobierno, y despues de muy ligeras indicaciones hechas por el ministerio y por la comision, aquel se conformó con que el pago de los intereses se verificase en el término de un año como proponia esta, en lugar de los seis meses que se habian establecido en el proyecto.

Se volvió á reproducir en cierto modo la discusion concluida sobre esta clase de intereses proponiéndose que el término prefijado era muy corto, por lo cual se debia señalar el de cuatro años, y el señor marqués de Espeja manifestó se podrían conciliar las diferentes opiniones, reduciendo este término á dos años; pero despues de una pequeña discusion sobre ello, se preguntó si estaba suficientemente discutido, y habiéndose declarado que lo estaba, se puso á votacion el artículo y quedó aprobado por 34 votos contra 27.

El Sr. conde de Parcent pidió que el Estamento adoptase una medida eficaz para impedir que durante este término los poseedores de las fincas, bien fuese para verificar el pago de los intereses, ó bien por mala intencion, y con miras depravadas, no deteriorasen dichas fincas y las estropeasen, formalizando una proposicion con este objeto: mas habiéndose contestado que esto estaba ya previsto en la misma ley, el Estamento no tomó en consideracion la proposicion.

Se leyó y quedó aprobado sin discusion alguna el artículo 5.º del proyecto, y siendo las tres de la tarde el Sr. Presidente cerró la sesion de este dia, manifestando que el Estamento se reuniria mañana á las once, con el objeto de proseguir la discusion.

## ESTAMENTO DE SEÑORES PROCURADORES.

### SESION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE.

#### Presidencia del señor conde de Almodovar.

Se abrió á las doce menos cuarto. Se leyó y aprobó sin discusion el acta de la sesion anterior.

El Sr. secretario Gonzalez dió cuenta de un oficio de señor ministro de Gracia y Justicia remitiendo algunos ejemplares de la ley para abolicion del voto de Santiago. Se decidió que se repartiesen y que el resto se archivase.

El Sr. vizconde de S. Simon, como relator de la comision de poderes, manifestó que esta hallaba conformes, y por lo mismo dignos de aprobarse, los documentos justifica-



tivos de la aptitud legal de don Manuel Alvarez Garcia, Procurador por Valladolid. Fue aprobado este dictamen.

El Sr. secretario Gonzalez hizo presente al Estamento que habiendo vuelto á este el señor Latorre, individuo que era de la comision de poderes y en cuyo lugar entró el señor Domecq, la mesa habia decidido á petición de este, que el primero volviese á ocupar su lugar en dicha comision, quedando por consiguiente separado de ella el referido señor Domecq. Quedó el Estamento enterado.

Juró y tomó asiento el Sr. D. Manuel Alvarez Garcia, Procurador por Valladolid, cuyos poderes acababan de ser aprobados.

Se pasó á la orden del dia que era la discusion por artículos del proyecto de ley y dictamen de la comision acerca del nuevo reglamento de Milicia Urbana; y estando ya discutido el artículo 21, se procedió á tratar del 22 que dice:

«Art. 22 del proyecto de ley. *Disciplina.*—Los individuos de la Milicia Urbana no gozan por servir en estos cuerpos de otro fuero civil ni criminal que aquel á que por sí están sujetos. Las faltas que cometan en el servicio, ó en actos y cosas que tengan relacion con él, serán juzgadas y castigadas por el consejo de disciplina respectivo. La sentencia será á pluralidad absoluta de votos, y en caso de empate decidirá el del presidente como de calidad. Exceptuándose los individuos de los batallones de campaña, los cuales mientras estos se hallen en servicio, gozarán del fuero militar, y estarán sujetos á las penas de la ordenanza del ejército.»

Art. 22 del dictamen de la comision. «*Disciplina.*—Los individuos de la guardia nacional no gozan, por servir en estos cuerpos, de otro fuero civil ni criminal que aquel á que por sí están sujetos. Las faltas que cometan en el servicio ó en actos y sobre cosas que tengan relacion con él, serán juzgadas y castigadas por el consejo de disciplina respectivo. La sentencia será á pluralidad absoluta de votos, y en caso de empate prevalecerá la opinion mas favorable al acusado. Exceptuándose los individuos de los batallones y escuadrones de campaña, los cuales mientras estos se hallen en servicio, gozarán del fuero militar, y estarán sujetos á las penas de la ordenanza del ejército.»

El Sr. Polo y Monge manifestó que la única diferencia que existía entre ambos artículos era que el del gobierno proponía que la sentencia sobre las faltas cometidas fuese decidida en caso de empate por el presidente como voto de calidad; y el de la comision juzga que en dicho caso de empate debe prevalecer la opinion mas favorable al acusado; y dijo que no podía menos de apoyar esto último por cuanto no veía en parte alguna se concediese en caso semejante voto de calidad al presidente, y porque si estos consejos de disciplina se considerasen como una especie de jurado, la comision habia tenido presente que en Inglaterra se necesita para hacer válida la sentencia la unanimidad de los votos, y en Francia las dos terceras partes, no pudiendo por consiguiente proponer que el solo voto de un hombre arrastrase la decision.

Sobre este punto giró un pequeño debate, en el cual hablaron apoyando lo dicho por el señor Polo y Monge, los señores marques de Someruelos, y marques de Espinardo; y combatiéndolo los señores Medrano y ministro de lo Interior. El señor Calderon y Collantes propuso que en el caso de ocurrir empate, se nombrase por el mismo consejo de disciplina un oficial del cuerpo que le decidiese; pero como no insistió en su propuesta, no se tomó sobre ella deliberacion.

Sin mas debate se juzgó el punto suficientemente discutido, y pasándose á votar por partes el artículo del proyecto del gobierno, fueron aprobadas la 1.<sup>a</sup> y 3.<sup>a</sup> y desechada la 2.<sup>a</sup> quedando admitida en vez de ésta, dicha 2.<sup>a</sup> del dictamen de la comision, y por consiguiente aprobada la totalidad del artículo referido como sigue:

Artículo 22. «Los individuos de la Milicia Urbana no gozan por servir en estos cuerpos, de otro fuero civil ni criminal que aquel á que por sí están sujetos. Las faltas que cometan en el servicio ó en actos y cosas que tengan relacion con él, serán juzgadas y castigadas por el consejo de disciplina respectivo.

La sentencia será á pluralidad absoluta de votos, y en caso de empate prevalecerá la opinion mas favorable al acusado.

Exceptuándose los individuos de los batallones y escuadrones de campaña, los cuales, mientras estos se hallen en servicio, gozarán de fuero militar criminal, y estarán sujetos á las penas de la ordenanza del ejército.»

La idea de que se incluyesen los escuadrones fue suministrada por el señor Chacon; y la de que gocen del fuero militar criminal lo fue por el señor ministro de lo Interior.

El Sr. secretario Trueba leyó una adición del señor marques de Espinardo para que los comandantes de batallones ó escuadrones, los de compañías, mitades ó escuadras, y destacamentos durante el tiempo que dure el servicio, estén autorizados para reprender y castigar con arreglo á lo que se prevenga en el artículo siguiente á los individuos en el punto ó acto en que estén reunidos; pero con obligacion de dar parte al comandante superior ó al consejo de disciplina. Se tomó en consideracion, y se decidió que pasase á la comision.

Se procedió en seguida á la discusion del artículo 23, el cual fue leído por el señor secretario Trueba, y es como sigue:

Artículo 23 del proyecto de ley. «Las penas que puede imponer el consejo de disciplina, serán: 1.<sup>o</sup> correcciones dadas privadamente, ó delante de la oficialidad reunida, ó pu-

blicadas en la orden del cuerpo.—2.<sup>o</sup> recargo en el servicio.—3.<sup>o</sup> arresto de los oficiales en sus casas, y de los soldados, cabos ó sargentos, en la sala de disciplina del cuartel donde lo hubiere, ó en el principal, ó en un cuarto de las casas consistoriales.—4.<sup>o</sup> suspension temporal de empleo en los oficiales y sargentos primeros.—5.<sup>o</sup> la postergacion para los ascensos de rigorosa escala.—6.<sup>o</sup> multas desde 20 reales hasta 500.—7.<sup>o</sup> espulsion con nota de las filas de la Milicia Urbana.»

Artículo 23 del dictamen de la comision. «Las penas que puede imponer el consejo de disciplina serán: 1.<sup>o</sup> correcciones dadas privadamente ó delante de la oficialidad reunida, ó publicadas en la orden del cuerpo.—2.<sup>o</sup> recargo en el servicio, que no podrá pasar de tres dias.—3.<sup>o</sup> arresto de los oficiales en sus casas, y de los sargentos, cabos ó guardias nacionales en la sala de disciplina del cuartel donde lo hubiere, ó en el principal, ó en un cuarto de las salas consistoriales, que tampoco pasará de tres dias.—4.<sup>o</sup> suspension temporal de empleo que podrá ser hasta de un mes.—5.<sup>o</sup> multas desde 8 reales á 500.—6.<sup>o</sup> espulsion con nota de la guardia nacional; pero esta pena solo podrá imponerse al que hubiese sido castigado ya por dos veces con las penas anteriores.—Para la imposicion de estas penas en donde no haya consejo de disciplina, lo compondrán todos los oficiales, los dos sargentos, dos cabos, y cuatro guardias nacionales, mayores de edad; y solo en el caso de no haber compañía completa, se compondrá el consejo del Alcalde con la concurrencia de dos individuos de la guardia nacional por clase, ó uno en la que mas no hubiese.»

El Sr. ministro de lo Interior se conformó en las variaciones hechas por la comision, pero se opuso á la última adición hecha por ella al artículo.

El Sr. marques de Espinardo propuso que ademas de suspension se dijese y privacion.

El Sr. ministro de lo Interior dijo que no podía convenir en que el consejo de disciplina privase de sus empleos á los individuos que los obtenían por nombramiento Real, ó del gobernador civil de la provincia.

El señor marques de Espinardo contestó que á lo menos debía darse á los consejos la facultad de proponer á S. M. dicha privacion de empleo.

El señor ministro de lo Interior convino en esta idea asi como en las demas variaciones propuestas por la comision, excepto en la adición hecha al párrafo 6.<sup>o</sup> y en la creacion del consejo de disciplina supletorio donde no le hubiese.

El señor marques de Torremejía opinó que la adición de la comision era inadmisibile, pues segun ella el consejo donde hubiese tres compañías se compondría de 17 individuos, mientras que el de un batallon se compondría solo de 9. Propuso, pues, que esta parte del artículo volviese á la comision para que viese el modo de establecer un consejo de disciplina donde hubiese una ó dos compañías, pues donde no llegase á haber una le creía enteramente innecesario.

El Sr. Ferrer dijo que encontraba un grave inconveniente en el párrafo 6.<sup>o</sup> de la comision, pues no veía porque al que comete un grave delito que merece la pena de la espulsion con nota, hubiese de ser necesario que hubiera cometido otros dos delitos menores para imponerle dicha pena. En cuanto á la formacion del consejo creyó que las penas graves no debía imponerlas sino el consejo del batallon, y en cuanto á las leves podrian aplicárselas los comandantes conforme al espíritu de una adición que se habia presentado.

El señor Lopez del Baño preguntó si el consejo de disciplina podria espulsar á un oficial ó sargento; á lo que contestó el señor ministro de lo Interior que ya habia manifestado que el gobierno no podia convenir en ello, y el señor Lopez del Baño continuó diciendo que en tal caso era preciso espresarlo así. También preguntó si la comision convenia en la supresion de la 2.<sup>a</sup> parte del párrafo 6.<sup>o</sup> de su artículo, y aquella manifestó que no tenia inconveniente en hacerlo.

Se declaró el artículo suficientemente discutido, y habiéndose votado por partes, quedó aprobado en los términos siguientes:

Artículo 23.—Las penas que puede imponer el consejo de disciplina serán: 1.<sup>o</sup> correcciones dadas privadamente, ó delante de la oficialidad reunida, ó publicadas en la orden del cuerpo.—2.<sup>o</sup> recargo en el servicio, que no podrá pasar de tres dias.—3.<sup>o</sup> arresto de los oficiales en sus casas, y de sargentos, cabos ó soldados en la sala de disciplina del cuartel donde lo hubiere, ó en el principal, ó en las casas consistoriales, que tampoco pasará de tres dias.—4.<sup>o</sup> suspension temporal de empleo que podrá ser hasta de un mes.—5.<sup>o</sup> multas desde 8 reales hasta 500.—6.<sup>o</sup> espulsion con nota de las filas de la Milicia Urbana.

Se leyeron en seguida, tomándose en consideracion y mandándose pasar á la comision las adiciones siguientes:

Del señor marques de Espinardo.—Que despues de las palabras *consejo de disciplina*, se añada *y comandantes de puestos, destacamentos y guardias*; y al fin del artículo se ponga otro párrafo que diga: «Los comandantes podrán reprender á sus subordinados si cometen alguna falta leve, y castigarlos si fuese de mas consideracion con recargo de horas de centinela, ú otro servicio en el mismo puesto.»

Del mismo señor marques de Espinardo.—que en vez del párrafo 5.<sup>o</sup> que proponia el gobierno se sustituya: «privacion de empleo, para lo cual el consejo de disciplina lo hará presente á la superioridad cuando lo crea necesario.»

Del señor Lopez del Baño al párrafo 6.<sup>o</sup> del artículo aprobado: «pero esta pena no se podrá imponer á los que tuviesen reales despachos.»

Del señor Vega y Rio:—que despues de la palabra *correcciones*, se diga *prudentes y decorosas*.

Del Sr. Cuesta:—que para que nunca sea par el consejo de disciplina, se diga que «en caso que falte alguno de sus individuos se tendrá por vocal nombrado como suplente al oficial á quien corresponda por grado y antigüedad en la escala del cuerpo.»

Se leyó el artículo 24 del proyecto del gobierno que dice así: «Ningun batallon, escuadron, compañía ó trozo de Milicia Urbana, podrá deliberar ni elevar en cuerpo exposiciones, quejas ó reclamaciones á S. M. ni á ninguna autoridad sobre objeto alguno, aun cuando fuere relativo al servicio, pues solamente podrán hacerlo acerca de este los gefes del cuerpo por conducto del gobernador civil de la provincia.»

Despues de una muy corta discusion se aprobó el artículo sustituyendo á la palabra *trozo* la de *escuadra*.

Se pasó luego al artículo 25 que dice así: «Si un batallon, escuadron, compañía, trozo ó individuo, tomase las armas sin orden ó permiso de la autoridad competente; sino las dejase cuando se le mande; si rehusare hacer el servicio para el cual sea llamado legalmente; si en cualquiera manera atentare contra el orden y tranquilidad pública; si embrazase ó pretendiese directa ó indirectamente influir en la libre eleccion de los nombrados para cualquiera destino ó cargo público, el gobernador civil de la provincia deberá suspender los cuerpos que hubiesen incurrido en estos atentados, y proceder contra los individuos que en particular hubiesen sido culpables, dando cuenta inmediatamente á S. M. de su providencia, y de las causas que la hayan motivado.»

Se leyó igualmente el artículo de la comision.

El señor Polo y Monge dijo que esta habia añadido las palabras *excepto en caso de alarma imprevista*, porque puede suceder que no haya tiempo para recibir las órdenes competentes. Que tambien habia añadido, que cuandolos gobernadores civiles hubiesen de proceder contra los culpables, fuese poniéndolos á disposicion del tribunal competente. Y por último, proponia que la suspension de esta fuerza no pudiese pasar de dos meses, á no mediar una real orden, porque creyó que debía ponerse un límite á la autoridad de los gobernadores civiles.

El señor ministro de lo Interior manifestó que la comision habia suprimido la palabra *individuo*, en cuya supresion no podia convenir el gobierno; que tampoco podia convenir en que se añadiesen las palabras *excepto en caso de alarma imprevista*, pues el dejar á los individuos la calificación de los casos de alarma, abriría la puerta á una infinidad de abusos. Que el gobierno admitia gustoso la adición de que los culpables se pusiesen á disposicion del tribunal competente, pues no era su intencion dar á los gobernadores civiles una autoridad que no les correspondia. Respecto al último párrafo dijo que le consideraba inútil, pues si el gobernador civil obra mal, no pasarían dos meses sin que el gobierno desaprobase su conducta; y si obraba bien, no tendria inconveniente en expedir la Real orden; pero que á pesar de su inutilidad, el gobierno no se oponia á que se añadiese esta circunstancia.

El Sr. Dominguez dijo que en el estado actual de la nacion hay pueblos en que los enemigos entran de repente, y no es posible culpar á un urbano que sabiéndolo antes que la autoridad, toma las armas y trata de reunirse con sus compañeros.

El señor ministro de lo Interior dijo que si este urbano pasaba á ponerse á disposicion de la autoridad, lejos de ser culpable hacia un servicio de mucha importancia, pero no era esto lo mismo que autorizar á 10, 15 ó 20 urbanos á que tomen las armas porque habiendo oido un trueno se les figure que es un cañonazo; pues tal autorizacion puede producir funestas consecuencias.

El Sr. Palarea amplió la idea presentada por el señor Dominguez, y respecto á lo que acababa de decir el señor ministro, espuso que en tal caso los podrian en ridículo sus compañeros y todo el pueblo, quedarian escarmentados, y no volverian á tomar las armas tan ligeramente.

El Sr. Calderon (don Saturnino) se opuso á dichas palabras de *alarma imprevista* diciendo que las autoridades de los pueblos no podrian estar tan desprevenidas que no tuviesen tomadas providencias para cualquier caso, y que toda reunion de fuerza armada sin intervencion de la autoridad, es siempre peligrosa, y muy pocas veces será capaz de prevenir riesgos verdaderos.

El Sr. Polo y Monge dijo que mejor que las palabras podrian responder al señor preopinante los hechos que están ocurriendo en todas partes.

El Sr. Agreda manifestó que sin necesidad de la adición de la comision, podian evitarse todos los inconvenientes, diciendo y *no las dejare*, en vez de *si no las dejare*; pues en tal caso el delito no estaba ya en haber tomado las armas, lo cual podia hacerse con muy buena intencion; sino en no obedecer al mandato de la autoridad que declaraba no haber motivo para tomarlas.

El Sr. Visado dijo que una de las razones que la comision habia tenido para suprimir la palabra *individuo*, era la pena impuesta en este artículo, á saber: la suspension de los cuerpos, pues no creía justo que porque un individuo ó varios de diversas compañías tomasen las armas, hubiese de quedar suspenso todo el cuerpo.

El Sr. ministro de lo Interior dijo que este recelo le parecia infundado, pues solo deberian ser suprimidas aquellas partes que hubiesen delinquido; y respecto á la enmienda propuesta por el señor Agreda, el gobierno la adoptaba gustoso.



El Sr. Alcalá Galiano manifestó que había tratado de oponerse al artículo porque creía que las circunstancias de la nación exigían que se diese cierto ensanche á los urbanos en casos de alarma y otros semejantes; pero que la corrección propuesta por el señor Agreda y adoptada por el gobierno coincidía enteramente con sus ideas.

Se declaró el artículo suficientemente discutido y quedó aprobado en los términos siguientes:

«Artículo 25.—Si un batallón, escuadrón, compañía, escuadra, ó individuo, tomase las armas sin orden ó permiso de la autoridad competente, y no las dejase cuando se le mande; si recusare hacer el servicio para el cual sea llamado legalmente; si en cualquiera manera atentare contra el orden y tranquilidad pública; si embarazase ó pretendiese directa ó indirectamente influir en la libre elección de los nombrados para cualquiera destino ó cargo público, el gobernador civil de la provincia deberá suspender los cuerpos que hubiesen incurrido en estos atentados, y proceder contra los individuos que en particular hubiesen sido culpables, poniéndolos á disposición del tribunal competente, dando cuenta inmediatamente á S. M. de su providencia y de las causas que la hayan motivado.»

Se leyó el artículo 26 del proyecto del gobierno, á saber: «Los individuos de la Milicia Urbana al tiempo de alistarse prestarán ante la autoridad local respectiva el juramento arreglado á la fórmula siguiente.»

«Jurais fidelidad y obediencia á la Reina nuestra Señora doña Isabel II, y en su nombre durante su menor edad á S. M. la Reina Gobernadora?»

«Jurais guardar y cumplir el Estatuto Real y las leyes de la monarquía; defender con las armas el territorio contra los enemigos exteriores é interiores, sostener y conservar el orden y tranquilidad del país; prestar apoyo á las autoridades siempre que os requieran; obedecer las órdenes de vuestros gefes y conservar las insignias que se os confían hasta perder la vida?—Si juro.—Si así lo hicieris, cumplireis con vuestro deber; y en otro caso sereis responsables ante Dios y las leyes.»

Leyóse también el artículo del dictamen, sin mas diferencia que la de añadir después de la palabra *gefes*, las siguientes: *en todo acto de servicio; no abandonar jamás el puesto que se os entregue y conservar &c.*

Después de una discusión muy breve, fue aprobado el artículo como le presentaba la comisión.

El Estamento no tomó en consideración una adición del señor Osca al artículo 22 ya aprobado; pero sí tomó y mandó pasar á la comisión una de los señores marques de Torremegía y Chacon sobre organización de un consejo para imponer las penas en pueblos en donde no llegue á haber un batallón; y otra del señor marques de Falces al artículo 4.º, para que después de las palabras *no serán incluidos en este alistamiento*, se añada *los que tengan algún impedimento físico ó moral permanente, legalmente declarado.*

El señor secretario Trueba leyó el artículo 27 del proyecto de ley concebido en estos términos: «Los Milicianos Urbanos que sirven por obligación en poblaciones, cuyo vecindario no pasa de 600 almas, tendrán la de proveer de su cuenta de las prendas de uniforme absolutamente necesarias que señalen los reglamentos; pero en las poblaciones de mayor vecindario el Urbano deberá costear y tener existentes todas las que constituyen el uniforme completo.—Los oficiales, sea cual fuere su graduación, y el vecindario del pueblo á cuya Milicia correspondan, deberán estar completamente uniformados en el término de dos meses contados desde el día en que reciban los nombramientos ó reales despachos.»

Leyó también el siguiente artículo del dictamen de la comisión: «Será de cuenta de los milicianos urbanos costearse el uniforme que señalan ó señalen los reglamentos en el caso que quieran usarlo; pero el servicio que á cada uno corresponda deberá hacerlo con el distintivo de la escarapela. Los oficiales, sea cual fuere su graduación, deberán estar completamente uniformados en el término de dos meses contados desde el día en que reciban los nombramientos ó reales despachos.»

El Sr. Polo y Monge dijo, que habiendo encontrado la comisión la dificultad de que no debía recargarse á los urbanos con el costo del uniforme, y no queriendo imponer ningún gravamen á los pueblos para este fin, pues sería atraer la odiosidad sobre estos cuerpos, no había encontrado otro medio de conciliarlo todo, que el que proponía en este artículo.

Apoyaron esta idea los señores Isturiz, Agreda y Alcalá Galiano, y habiendo manifestado el señor ministro de lo Interior, que el objeto del gobierno había sido que en los pueblos pequeños solo tuviesen una gorra y una especie de levita, pero que no tenía inconveniente en adoptar lo que la comisión proponía de que se usase solo la escarapela, se votó el artículo de la comisión, y fue aprobado.

También lo fue el 28 que es igual en ambos proyec-

tos, y dice así: «El armamento, corraje, cartuchera ó canana, y las municiones serán suministradas por cuenta del Estado; pero el entretenimiento de dichas prendas será costado por el urbano, á menos que el deterioro provenga de acto del servicio ó haya sido notoriamente involuntario é inevitable.»

Se tomó en consideración y mandó pasar á la comisión la siguiente adición del señor Polo y Monge: «En atención á la falta de armas para surtir á toda la Milicia Urbana que debe alistarse conforme á esta ley, y no estando la actual armada completamente, será esta preferida para el repartimiento de armas que haya de hacerse.»

Leyóse el artículo 29 del proyecto, que es como sigue: «Las cajas de guerra, trompetas y cornetas, el uniforme de los mismos y de los tambores, los enseres necesarios en los cuarteles donde los hubiere, y en los cuerpos de guardia se pagarán de los fondos públicos y del producto de las multas en que incurran los Urbanos. El consejo de administración, y disciplina entenderá y será responsable de todo lo concerniente á la distribución é inversión de las cantidades procedentes de dichos fondos, que para estos objetos se pongan á su disposición, llevando la competente cuenta y razón, bajo la intervención inmediata de la autoridad civil del pueblo, y aprobación á su tiempo del gobernador civil de la provincia.»

El señor Polo y Monge dijo que la comisión no había hecho mas que añadir al fin del artículo *de acuerdo con el consejo de Provincia cuando los hubiere*; pero que habiendo resuelto el Estamento que se suprimiese esta circunstancia en otros artículos, la comisión no insistía en que subsistiese en este.

El señor Laborda pidió que en el artículo se dijese que estos gastos y el prest de los tambores, trompetas y cornetas se satisfarán de los fondos de propios, y en su defecto por un reparto vecinal, incluyéndose en él á todos los que se hallan con la cualidad de vecinos sin distinción de clases.

El señor ministro de lo Interior sostuvo que el artículo debía quedar con la generalidad que estaba, pues en unas partes no había fondos de propios y en otras serían muy mal recibidos los repartos vecinales, cuando en la palabra *general fondos públicos* se incluían estos y otros de que podrá usarse según las circunstancias; además que el gobierno pedía en los presupuestos 7 millones de reales para este fin por los descubiertos en que pudieran hallarse algunos pueblos.

Púsose á votación el artículo, y fue aprobado.

Se pasó después á las disposiciones generales y se leyó el siguiente:

«Artículo 30.—La facultad de disolver, ó reformar algún cuerpo de Milicia Urbana, y la de suspender su organización en algún pueblo ó provincia son exclusivas de S. M. según lo exijan las circunstancias y el bien y seguridad del estado.»

El artículo del dictamen de la comisión añade á lo anterior estas palabras: «dando cuenta motivada á las Cortes si se hallaren reunidas, ó en suproxima reunión en otro caso.—Esta suspensión ó disolución no podrá prolongarse á mas de un año contado desde el día que se verifique; sino en virtud de una ley.»

El señor Polo y Monge dijo que tomaba con sentimiento la palabra porque temía se renovase la discusión del otro día sobre confianza ó desconfianza en el gobierno; pero que la comisión había manifestado que sus intenciones eran muy puras, y había sentido que algún individuo creyendo apoyarla hubiese usado de inculpaciones personales que suelen producir un efecto contrario al que se desea. Que la misma comisión había añadido aquellas palabras al artículo, porque el del proyecto primitivo dejaba al gobierno una latitud inmensa, no solo para suspender y reformar, sino aun para disolver la Milicia Urbana sin restricción ni limitación alguna; y puesto que el gobierno había citado varias veces en su apoyo la ley de la guardia nacional francesa, podía leer el artículo 5.º de la misma ley, y vería que la comisión no se había separado mucho de ella.

El señor ministro de Hacienda dijo que de las dos adiciones que hacia la comisión, una la de dar cuenta motivada á las Cortes, y la otra de que se restablezcan los cuerpos á lo mas en el término de un año, la primera estaba casi desechada, pues el Estamento desaprobó ya el otro día que el gobierno diese cuenta en un caso muy semejante; y respecto á la 2.ª el gobierno no tendría inconveniente en admitirla.

El Sr. Ferrer contestó que el Estamento había desechado que el gobierno diese cuenta de la movilización de la Milicia, pero ahora se trataba de su suspensión ó disolución, que era cosa de mucha mayor importancia.

El señor ministro de lo Interior advirtió que no se trataba de la reforma ó disolución de la Milicia en general, sino de la de algún cuerpo en particular, cuando hubiese causa para ello.

El señor Alcalá Galiano preguntó si en el caso de quitarse la palabra *motivada*, admitiría el gobierno lo que la comisión proponía.

El señor ministro de Hacienda dijo que se opondría igual-

mente, porque esta espresion, como se manifestó el otro día ó quiere decir mucho ó no quiere decir nada; y además de que sin necesidad de ponerse esta obligación en el artículo, la Cortes si lo juzgan conveniente, pueden presentar una petición y examinar la conducta del ministro en caso necesario.

El Sr. Alcalá Galiano replicó que no se trataba de hacer una acusación al ministro, sino de indagar las causas que podían haber motivado la disolución de tal ó cual cuerpo.

El señor ministro de Hacienda insistió en que no estando limitado el derecho de petición, podía hacerse una petición sobre aquello que se deseaba; y que si en este mismo año los secretarios del Despacho no habían tenido inconveniente en contestar á varias preguntas que se les habían hecho, no podía creer que lo evitarán en una materia tan grave como sería aquella de que se trata.

Se declaró el artículo suficientemente discutido, y fue aprobado según le había presentado el gobierno, añadiendo las últimas palabras de la comisión que empiezan: *esta suspensión &c.*

El artículo 31 del proyecto decía: «La Milicia Urbana formada actualmente, subsistirá por ahora sin la menor alteración en donde se halle organizada, bien sea con arreglo al Real Decreto de 16 de febrero y aclaraciones posteriores, bien sea por disposiciones especiales de los capitanes generales de las provincias.»

El señor ministro de lo Interior, dijo que aprobado el artículo segundo que la Milicia Urbana se compondría de los individuos existentes y de los demás que deban alistarse, ya enteramente inútil este artículo; y si la comisión convenía en ello, podría suprimirse.

El señor marqués de Espinosa manifestó que la comisión estaba conforme, y el artículo quedó suprimido.

Se leyó el artículo 32 del proyecto; y dictamen, que dice en este modo:

«Artículo 32 (del proyecto). Los reglamentos é instrucciones que forme el gobierno de S. M. fijarán las reglas convenientes á fin de llevar á efecto la organización de la Milicia Urbana conforme á las bases establecidas en esta ley.»

«Artículo 32 (del dictamen de la comisión). El gobierno no formará el proyecto de ordenanza de estos cuerpos, que detalle las obligaciones y las penas, los premios, resarcimientos y auxilios á sus individuos, el cual será presentado á las Cortes.»

El Sr. Polo y Monge espuso que por este artículo quedaba á disposición del gobierno cosas muy esenciales, como las obligaciones, las penas, los premios, los resarcimientos &c.; y aunque parecían mas propias de un reglamento, creía la comisión que deberían á lo menos indicarse en la ley.

No habiendo ningún señor Procurador que hablase pró ni en contra, se pasó á votación el artículo presentado por el gobierno, y fue aprobado.

El señor presidente dijo que mañana se leería el proyecto de ley según ha sido aprobado para ver si el Estamento conforma con él; y en seguida se discutiría el proyecto de ley relativo á la quinta de 250 hombres pedida por el gobierno para el año 1835. Y cerró la sesión á las cuatro de tarde.

#### BOLSA DE MADRID del 24 de noviembre.

Contado.	A PLAZO.			TOTAL
	Firm.	Voluntad.	Prima.	
Titulos del 4...	51	53 53 31 1/4	1 1/4	4.700,0
Id. del 5...		62 61 11 1/2		1.050,0
Inscri. del 4...				
Id. del 5...				
Vales no cons.	20	20 78 20 3/4		55,50
Deuda sin int.		11 1/2		410,0
				1.000,0

Cambios. — Londres 38 5/8. París 16 7/8. Alicante 3 1/4 b.; Barcelona 11 1/4 d.; Bilbao 1 1/4 d.; Cadix 1 1/2 b.; Coruña 3 1/4 d.; Granada 3 1/4 d.; Málaga 1 1/2 b.; Santander 1 1/2 b.; Santiago 1 d.; Sevilla 1 1/4 b.; Valencia 1 1/2 b.; Zaragoza 3 1/4 d.; Descuento de letra 4 1/4 por 100.

#### Espectáculos.

EN EL PRINCIPE. A las seis y media de la noche *Guillelmo Tell*, ópera en cuatro actos, música del maestro Rossini.

EN LA CRUZ. 1.ª El Vampiro, comedia en un acto: 2.ª Sinfonía: 3.ª Cada uno en su casa y Dios en la de todos, comedia en un acto: 4.ª baile nacional: 5.ª Retascon, barba y comadron, comedia en un acto.

Este periódico se suscribe en Madrid en el despacho principal del Observador, calle del Principe, núm. 5 y 6, esquina á la de la Visitación, en la librería de la ciudad de Cruz, frente las gradas de san Felipe de Orea calle de la Montera, y en la de Sanz calle de Carretas.

En las provincias en las librerías de Piferrer, Barcelona; Hortal, Cádiz; Ferris, Valencia; Hidalgo, Sevilla; Garcia, Bilbao; Sanz, Granada; Calvo, Coruña; Benedicto, Murcia; Rey Romero, Santiago; Blanco, Salamanca; Arnaiz, Burgos; Longas, Pamplona; Riesg, Santander; Pis, Plasencia; Berard, Córdoba; Cereceda, Jaén; Hernandez, Toledo; Carreras, Málaga; Rodriguez, Valladolid; Yagües, Zaragoza; Riera, Reus; Pazos, Orense; Bueno, Jerez; Guasp, Palma; Fina de Carrillo, Badajoz; Benedicto, Cartagena; Buluort, Gerona; Lafita, Barbastró; Longoria, Oviedo; Lopez y Sotillo, calle de la Boica; en Huelva; Algeiras, don Antonio Sierra. En Manzanares, en la secretaría de ayuntamiento á cargo de don Francisco Garcia. En Cáceres, casa de don Manuel Segura. Carratala, Alicante; Casanovas, Cervera; Fernandez, Leon; Coroninas, Lérida; Puyol, Lugo; Angelon, Reus; Perez Rioja, Soria; Verdader, Tarragona; Puigrubí, Tortosa.